

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA D.E.I.P., veinticinco de abril de Dos Mil Veintidós.

ASUNTO QUE SE TRATA

Se procede a resolver acerca de la viabilidad de la orden de pago dentro del proceso ordinario laboral - cumplimiento de sentencia promovido por JOAQUÍN ANTONIO DE LA HOZ BOLAÑO contra: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y otro, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

El Art. 100 del C.P.T.S.S., relativo al procedimiento de la ejecución, dispone: *“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.”*

En aplicación del Art. 145 del C.P.T.S.S., el Art. 306 del Código General del Proceso, expresa: *“Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser del caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.*

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.”

En el caso examinado, quien apodera a la parte demandante solicita que se libere ejecución por el cumplimiento de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010 emitida por la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, a través de la cual se revocó el fallo de primera instancia y se condenó a la Dirección Distrital de Liquidaciones que cesaran *“(…) los descuentos efectuados al señor JOAQUIN DE LA HOZ BOLAÑO de las mesadas pensionales de su jubilación, por concepto de indemnización por despido, reconocidas por la E.D.T.; por ser estas compatibles.”*; asimismo a *“reembolsar al señor JOAQUIN DE LA HOZ BOLAÑO las sumas totales o parciales que fueron descontadas de las mesadas pensionales, las cuales deberán ser indexadas.”*, más las costas procesales.

Se procede a realizar los guarismos a fin de determinar los valores por los conceptos objeto de las condenas, teniendo en cuenta además las resoluciones N°0016 del 13 de febrero de 2006 y N°0020 del 10 de marzo de 2006 emitidas por la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. en liquidación, lo cual arroja los siguientes resultados:

Año	Mes	Sumas Descontadas y/o reintegradas	I.P.C. Inicial	I.P.C. Final	Valor Indexación
2006	Ene	\$ 76.543.183	56,45	116,26	\$ 81.099.163
	Ene	\$ 26.000.000	56,45	116,26	\$ 27.547.564
	Feb	\$ 1.224.000	57,02	116,26	\$ 1.271.655
	Mar	\$ 1.224.000	57,46	116,26	\$ 1.252.544

	Abr	\$ 1.224.000	57,72	116,26	\$ 1.241.389
	May	\$ 1.224.000	57,95	116,26	\$ 1.231.604
	Jun	\$ 1.224.000	58,18	116,26	\$ 1.221.896
	M.A.-Jun	\$ 1.224.000	58,18	116,26	\$ 1.221.896
	Jul	\$ 1.224.000	58,21	116,26	\$ 1.220.636
	Ago	\$ 1.224.000	58,21	116,26	\$ 1.220.636
	Sep	\$ 1.224.000	58,46	116,26	\$ 1.210.181
	Oct	\$ 1.224.000	58,60	116,26	\$ 1.204.366
	Nov	\$ 1.224.000	58,66	116,26	\$ 1.201.882
	Dic	\$ 1.224.000	58,70	116,26	\$ 1.200.229
	M.A.-Dic	\$ 1.224.000	58,70	116,26	\$ 1.200.229
2007	Ene	\$ 1.224.000	59,02	116,26	\$ 1.187.085
	Feb	\$ 1.224.000	59,41	116,26	\$ 1.171.257
	Mar	\$ 1.224.000	59,83	116,26	\$ 1.154.443
	Abr	\$ 1.224.000	60,09	116,26	\$ 1.144.152
	May	\$ 1.224.000	60,29	116,26	\$ 1.136.296
	Jun	\$ 1.224.000	60,48	116,26	\$ 1.128.881
	M.A.-Jun	\$ 1.224.000	60,48	116,26	\$ 1.128.881
	Jul	\$ 1.224.000	60,73	116,26	\$ 1.119.195
	Ago	\$ 1.224.000	60,96	116,26	\$ 1.110.354
	Sep	\$ 1.224.000	61,14	116,26	\$ 1.103.482
	Oct	\$ 1.224.000	61,05	116,26	\$ 1.106.913
	Nov	\$ 1.224.000	61,19	116,26	\$ 1.101.580
	Dic	\$ 1.224.000	61,33	116,26	\$ 1.096.271
	M.A.-Dic	\$ 1.224.000	61,33	116,26	\$ 1.096.271
2008	Ene	\$ 1.224.000	61,80	116,26	\$ 1.078.625
	Feb	\$ 1.224.000	62,53	116,26	\$ 1.051.743
	Mar	\$ 1.224.000	63,29	116,26	\$ 1.024.416
	Abr	\$ 1.224.000	63,85	116,26	\$ 1.004.696
	May	\$ 1.224.000	68,14	116,26	\$ 864.380
	Jun	\$ 1.224.000	68,73	116,26	\$ 846.453
	M.A.-Jun	\$ 1.224.000	68,73	116,26	\$ 846.453
	Jul	\$ 1.224.000	69,06	116,26	\$ 836.560
	Ago	\$ 1.224.000	69,19	116,26	\$ 832.688
	Sep	\$ 1.224.000	69,06	116,26	\$ 836.560
	Oct	\$ 1.224.000	69,30	116,26	\$ 829.423
	Nov	\$ 1.224.000	69,49	116,26	\$ 823.809
	Dic	\$ 1.224.000	69,80	116,26	\$ 814.714
	M.A.-Dic	\$ 1.224.000	69,80	116,26	\$ 814.714
2009	Ene	\$ 1.224.000	70,21	116,26	\$ 802.809
	Feb	\$ 614.613	70,80	116,26	\$ 394.637
	Totales	\$ 154.565.796			\$ 154.033.612

CONCEPTOS	VALORES
Descuento objeto de reintegro	\$ 154.565.796
Indexación desde el 01/Ene/06 al 31/Mar/22	\$ 154.033.612
Costas aprobadas proceso ordinario 1a instancia	\$ 3.312.464
Costas fijadas por la Corte Suprema de Justicia	\$ 7.500.000
Tota liquidación mandamiento de pago	\$ 319.411.872

Por lo que hasta la fecha se adeuda un total de \$319.411.872,⁰⁰, suma esta por la cual se librará el mandamiento de pago.

Finalmente, es pertinente hacer referencia a lo previsto en el Art. 612 del Código General del Proceso, el cual indica: “Artículo 612. Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada.”.

Asimismo, el inciso 5° del Decreto 1365 del 27 de junio de 2013 postula: “De acuerdo al artículo 6 numeral 3 literal i) del Decreto 4085 de 2012, la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se limita a aquellos procesos en los que estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con su relevancia, la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda, el número de procesos similares, la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo, la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial”.

En ese sentido, como quiera que las entidades enjuiciadas son entidades públicas, se ordenará notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a lo señalado en la antedicha disposición; cumplido lo anterior, se continuará con el trámite pertinente en este asunto.

En lo que atañe a la medida cautelar solicitada frente al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, se advierte que el Art. 45 de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”,

establece que en los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrán decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución: “Artículo 45. *No procedibilidad de medidas cautelares. La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.*”

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

Parágrafo. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.” (Resaltos y subrayas fuera del texto)

En conclusión, de conformidad con la norma antes citada, encuentra este ente judicial que no es procedente el decreto de la medida cautelar de embargo propalada y en virtud de ello, se negará la misma en cumplimiento de lo dispuesto en el referido Art. 45 de la Ley 1551 de 2012.

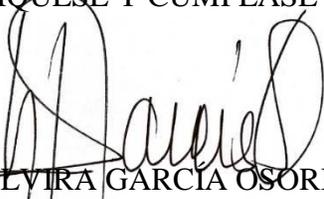
En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

1. Proferir mandamiento ejecutivo en contra de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, en su calidad de liquidadora de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P., y del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de garante del reembolso por descuento pensional, por la suma de \$319.411.872,⁰⁰, y a favor de JOAQUÍN ANTONIO DE LA HOZ BOLAÑO, por concepto de reembolso pensional, indexación y las costas procesales (Arts.: 145 C.P.T.S.S.; 306 C.G.P.).
2. Notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado según lo preceptuado en el Art. 612 del C. G. del P., en concordancia con lo dispuesto en los Decretos 4085 de 2011 y 1365 de 2013, a la cual se le correrá traslado por un término de veinticinco (25) días a partir del día siguiente hábil al de la notificación del presente auto, para lo cual se le hará entrega de esta providencia. Vencido dicho término, se continuará con el trámite del proceso.
3. Advertir que la presente providencia debe notificarse por aviso a los representantes legales de las entidades demandadas Dirección Distrital de Liquidaciones y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en virtud de lo consagrado en el inciso 2º del Art. 306 del C.G.P., en concordancia con el Parágrafo del Art. 41 del C.P.T.S.S.
4. Notificar la presente providencia al Procurador 20 Judicial Laboral I Dr. William Valencia Macías o quien haga sus veces, de conformidad con lo normado en el Art. 277 de la C. P., para lo de su competencia. Librese la comunicación de rigor.
5. Negar el decreto de medidas cautelares de conformidad con lo regulado en el Art. 45 de la Ley 1551 de 2012.

6. Señalar que si en el término de traslado no se proponen las excepciones de que trata el numeral 2° del Art. 442 del Código General del Proceso, se entiende ratificado los valores liquidados en esta providencia, se seguirá adelante con la ejecución, se practicará la liquidación del crédito y las costas del ejecutivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ALICIA ELVIRA GARCÍA OSORIO
JUEZ

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Barranquilla, 26 de abril de 2022
NOTIFICADO POR ESTADO N°63
El Secretario _____
Dairo Marchena Berdugo